



NUE 9-D-2019 (OC)

[REDACTED] contra Directora del Instituto Nacional "Acción Cívica Militar"

Resolución definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las nueve horas con diez minutos del veintisiete de enero de dos mil veinte.

El 14 de marzo de 2019, [REDACTED], en adelante el denunciante, interpuso denuncia en contra de [REDACTED] Directora del Instituto Nacional "Acción Cívica Militar", en adelante la denunciada, por el supuesto cometimiento de la infracción grave establecida en el Art. 76 letra "c" de la LAIP consistente en: *"No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por un Oficial de Información"*.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

1. Descripción del caso

A. Fundamento fáctico

Según lo expuesto por [REDACTED] en su escrito, los hechos en que fundamenta su acusación se derivan de la interposición de una solicitud de información, en la cual requirió copia certificada de: "El detalle de maestros de horas clases, del año lectivo 2019, con sus respectivas materias académicas del Instituto Nacional Acción Cívica Militar"; interpuesta ante la Oficina de Información y Respuesta del MINEDUCYT. En ese orden, el oficial de información resolvió: "Informarle que no se puede entregar la información requerida [...], debido a la falta de respuesta de la Unidad Administrativa que en este caso es la Dirección Departamental de Educación de San Salvador; adjuntando a su escrito una copia de la resolución referencia No. MINED-2019-0090, de fecha veintiséis de febrero del dos mil diecinueve.

Ante ello, el denunciante consideró que la Directora del Instituto Nacional "Acción Cívica Militar", [REDACTED], había incurrido en la infracción muy grave letra "a" consistente en ocultar información, y la infracción muy grave letra "e" relacionada a la negativa de entregar lo solicitado sin la debida justificación; debido a esa negativa de entregar la información por parte de la persona antes mencionada.



B. Diligencias Preliminares

Previo a declarar el inicio del procedimiento sancionador y visto el contenido del escrito de denuncia presentado por [REDACTED] en contra de la **Directora** del Instituto Nacional Acción Cívica Militar, se advirtió que el denunciante no señaló el nombre completo de dicha servidora pública; aunado a ello, este Instituto no tenía certeza sobre si el MINEDUCYT había realizado las gestiones para obtener dicha información; razón por la que, en virtud del principio de verdad material regulado en el Art. 3 numeral 8 de la Ley de Procedimientos Administrativos (en adelante LPA), se solicitó la remisión del expediente administrativo ref. MINED-2019-0090, con el objeto de verificar el procedimiento seguido por el oficial de información para la obtención de la información requerida por [REDACTED] y de esa forma, determinar quiénes fueron los servidores públicos intervinientes y si atendieron diligentemente dicho requerimiento.

En ese orden, según las diligencias que constan en el referido expediente, a folio 6 consta una nota de fecha 21 de febrero de 2019, dirigida a la Licenciada [REDACTED] **Directora** del Instituto Nacional Acción Cívica Militar, mediante la cual el Director Departamental de Educación de San Salvador, le requiere que remita la información solicitada en calidad de urgente, para evitar ser acreedora de sanciones de multas reguladas de conformidad al Art 77 de la LAIP, caso contrario debía enviar nota de justificación a la unidad de transparencia departamental informando por qué no se puede dar la información o solicitando prórroga para la entrega [...]; no obstante, no consta en el expediente respuesta alguna por parte de la Directora del referido Instituto.

De lo anterior, se advirtió que el entonces oficial de información [REDACTED] realizó las gestiones con el enlace departamental correspondiente a fin de obtener la información solicitada, siendo parte de dicho trámite, el requerimiento realizado a la servidora pública que se denuncia. De ahí que, este Instituto logró individualizar fehacientemente a la denunciada, cuyo nombre completo es: [REDACTED] y ostenta el cargo de **Directora del Instituto Nacional Acción Cívica Militar**. Entonces, esa aparente falta u omisión de pronunciamiento respecto de la información que le fue requerida, en relación a la descripción de los hechos realizada por el denunciante en su escrito, dió indicios sobre la posible configuración de infracciones a la LAIP.

No obstante, pese a que el denunciante señalaba la posible comisión de dos infracciones, este instituto realizó la tipificación más adecuada conforme a los hechos planteados, determinando iniciar el procedimiento por el posible cometimiento de la infracción grave letra "c" del Art. 76 de la LAIP consiste en: *"No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por un Oficial de Información"*.

C. Trámite

El Instituto admitió la denuncia y se designó a la Comisionada en funciones **Olga Noemy Chacón de Hernández** para instruir el procedimiento y elaborar un proyecto de resolución.

Recibido el informe de defensa, la denunciada manifestó en lo medular, lo siguiente:

a) que la información le fue solicitada el 24 de enero de este año, siendo esta proporcionada a las oficiales de información [REDACTED] y [REDACTED] por medio de correo electrónico el día 30 de enero del presente año, de lo cual tiene constancias del envío electrónico; b) que dicha información le fue solicitada nuevamente el día 21 de febrero del presente año por el Licenciado [REDACTED], Director Departamental de Educación de San Salvador y fue proporcionada en físico, en formato original y copia certificada, el día cuatro de marzo del presente año, teniendo la respectiva copia de recibido; y no así como consta en el expediente con referencia MINED-2019-0090, que existen notas donde se le solicita información, más no las notas donde ella cumple y proporciona lo solicitado, entregando los documentos respectivos en fechas prudentes. En ese sentido, el hecho que la información no haya sido entregada al solicitante, señor [REDACTED], sale de la esfera de su control y voluntad en tanto ella si cumplió con su obligación de entregar la información; c) que según la resolución por falta de entrega de información de las nueve horas y cuarenta y cuatro minutos del día 26 de febrero de 2019, emitida por el MINEDUCYT, consta que la información le fue requerida en fecha 27 de noviembre de 2018, y que mencionan que se le hizo una prevención, la cual nunca recibió; sino que fue hasta el día 21 de febrero de 2019 que [REDACTED] Director Departamental de Educación de San Salvador, le requirió la información en físico, misma que fue entregada en copias certificadas el día 4 de marzo del mismo año, teniendo la respectiva copia de



recibido. Finalmente, ofreció como prueba una serie de documentos, los cuales serán detallados en el siguiente párrafo.

La audiencia oral se llevó a cabo en la fecha y hora señalada, con la comparecencia del denunciante [REDACTED] y la denunciada [REDACTED]. En la etapa de ofrecimiento de prueba, la denunciada no aportó elementos probatorios durante la audiencia; sin embargo, en el informe de defensa rendido, ofreció la siguiente documentación:

1. "Fotocopia de correo electrónico de fecha 24 de enero de 2019", con la que pretende comprobar que la primera vez que le fue requerida la información, fue a través de la licenciada [REDACTED] Asesora Técnica de Gestión Departamental de Educación de San Salvador, por medio de una remisión de correo de la Secretaría de la Jefatura de Asistencia Técnica Departamental de San Salvador, licenciada [REDACTED] y de la oficial de información, Licenciada [REDACTED]
2. "Fotocopia de correo electrónico de fecha 30 de enero de 2019", con la que pretende comprobar que remitió o proporcionó la información solicitada a la secretaria de la Jefatura de Asistencia Técnica Departamental de San Salvador, Licenciada [REDACTED] y de la oficial de información, licenciada [REDACTED]
3. "Fotocopia de solicitud del día 21 de febrero de 2019, por el Licenciado [REDACTED] Director Departamental de Educación de San Salvador", donde se le solicita la información en copias certificadas.
4. "Fotocopia del escrito de remisión de documentación suscrito por su persona en calidad de Directora del Instituto Nacional Acción Cívica Militar del día 4 de marzo de 2019, dirigido al licenciado [REDACTED], Director Departamental de Educación de San Salvador", con la que pretende comprobar que dicha información fue proporcionada en físico, y recibida el 4 de marzo de 2019 a las 3:33pm, por la Secretaria Asistente del Director Departamental de San Salvador, licenciada [REDACTED]

Por su parte, el denunciante no aportó elementos probatorios.

Luego de escuchar los argumentos de la denunciada para ofertar dichos elementos y de correr traslado al denunciante, el pleno procedió a deliberar sobre la admisibilidad de la misma, teniendo en cuenta los criterios de pertinencia y utilidad de la prueba, de conformidad a los Arts. 318 y 319 del Código Procesal Civil y Mercantil; y finalmente, decidió admitir la prueba ofrecida por [REDACTED] la cual ya obra en el expediente por haber sido incorporada al mismo en el informe de ley. Ante esta decisión tomada por el pleno de Comisionados, no se interpuso recurso alguno.

En la etapa de alegatos, el **denunciante** en lo medular, ratificó la denuncia incoada, pues considera que la denunciada violentó la ley al no proporcionar lo que se le pedía en la solicitud 0090; siendo esta una falta de respeto a la oficina de información y respuesta, por no acatar dicho requerimiento.

Por su parte, la **denunciada** en lo medular, expuso: a) que una vez recibido el requerimiento ella procedió a preparar la información que se lo solicitó, y que la misma fue remitida a la departamental de educación de san salvador; b) que considera que no ha habido incumplimiento de su parte en tanto ella remitió la información solicitada en fecha 4 de marzo de 2019, de lo cual tiene copia de recibido por [REDACTED] la cual se ofreció como prueba; c) y, por último, aclara que el señor [REDACTED] no le solicitó la información del detalle de horas clase de manera directa, pues siendo él ex docente de dicha institución, ella con gusto se lo hubiese entregado de manera directa.

Finalmente, en la fase de preguntas, la Comisionada Chacón le consultó al denunciante: que si a esa fecha (19/12/2019) ya le había sido entregada la información relativa al detalle de maestros de horas clase del año lectivo 2019 con sus respectivas materias académicas del Instituto Nacional Acción Cívica Militar, solicitada a través del Oficial de Información del MINED; ante lo cual, el denunciante le respondió que no lo había recibido.

2. Análisis del caso

El análisis jurídico del presente caso seguirá el orden lógico siguiente: (I) Breves consideraciones sobre el procedimiento sancionador que tramita este Instituto; (II) análisis de los principios rectores de la potestad sancionadora en sede administrativa, (III) análisis concreto del caso entorno a lo argumentado y a la prueba admitida en el presente procedimiento; (IV) determinación sobre si se logra acreditar el cometimiento de la



infracción objeto de la causa por parte de la denunciada, conforme a los hechos probados; y (V) consideraciones finales y exhortación al MINEDUCYT.

I. El Derecho Administrativo Sancionador, como toda rama del derecho, se guía por una serie de principios que constituyen un criterio informador de la actividad de la administración pública relacionado al poder punitivo del Estado. En este sentido, se puede hablar del Derecho Penal como elemento integrador del Derecho Administrativo Sancionador, es decir, la ausencia de un ordenamiento penal administrativo no debe interpretarse como una puerta abierta a la administración para la aplicación libre y arbitraria de sus facultades sancionadoras; por lo que, la aplicación supletoria de los principios básicos del Derecho Penal sirven como garantía o límite en el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora.

La sanción administrativa constituye un acto de gravamen que disminuye o debilita la esfera jurídica de los particulares, mediante la privación de un derecho, como prohibición de una determinada actividad, denominada sanción *interdictiva* o a través de la imposición de un deber económico antes inexistente *-sanción pecuniaria-*.

El *procedimiento sancionatorio* que este Instituto realiza y que se encuentra regulado a partir del Art. 76 de la LAIP, tiene el propósito de identificar y definir la responsabilidad en la que puedan recaer los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de la LAIP, para lo cual, en el Título VIII de la misma se encuentran las infracciones a la LAIP y sus sanciones. Esas infracciones se dividen en tres apartados, los cuales son: (i) Infracciones muy graves; (ii) Infracciones graves; e (iii) Infracciones leves.

En concordancia con lo anterior, este Instituto sigue un irrestricto apego a las garantías, –sustantivas y procesales– constitucionales durante el desarrollo del procedimiento sancionatorio, siguiendo las reglas de la sana crítica y verificando la correcta aplicación de los principios generales del derecho.

Además, con la entrada en vigencia de la LPA, se regulan principios y garantías para los sujetos pasivos de los procedimientos sancionatorios, pues no se debe inobservar la condición de inferioridad en la que se encuentra el denunciado ante la potestad punitiva del Estado.

II. Dentro de esa gama de principios, se encuentra -entre otros- el principio de presunción de inocencia, el cual establece que *no se considerará que existe responsabilidad administrativa mientras no se establezca conforme a la ley, para lo cual, se requiere prueba de la acción u omisión que se le atribuya al presunto infractor*. De igual forma, tenemos el principio de responsabilidad, que estatuye que *solo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción las personas naturales y jurídicas que resulten responsables a título de dolo, culpa o cualquier otro título que determine la ley*;¹ es decir, que en materia administrativa sancionatoria se debe acreditar el dolo o culpa en la acción sancionable, pues en virtud de tales principios, solo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas que resulten responsables de las mismas; por tanto, la existencia de un nexo de culpabilidad constituye un requisito *sine qua non* para la configuración de la conducta sancionable².

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

De acuerdo a lo establecido vía jurisprudencia, se entiende que debe existir dolo o culpa para que la persona que resulte responsable del cometimiento de una infracción administrativa sea sancionada. Asimismo, la Sala de lo Contencioso Administrativo ha establecido que el principio garante de la presunción de inocencia, excluye la posibilidad de imponer sanciones con base a criterios de responsabilidad objetiva, es decir, **prescindiendo de la existencia de dolo y culpa**, y de que si la infracción es en alguna forma imputable al sujeto, y es que en todo ordenamiento sancionador rige el criterio de que la **responsabilidad puede ser exigida solo si en el comportamiento del Agente se aprecia la existencia de dolo o culpa**.

Aunado al tema de la responsabilidad, el Art. 4 del Código Penal respecto del principio de responsabilidad, sustancialmente, reza "la pena o medida de seguridad no se impondrá si la acción u omisión no ha sido realizada con dolo o culpa. Por consiguiente, queda prohibida toda forma de responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva es aquella que se atribuye a una persona sin considerar la dirección de su voluntad, sino

¹ Principios de la potestad sancionadora, Art. 139 numerales 4 y 5 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA).

² Sentencia Definitiva de la Sala de lo Contencioso Administrativo, de fecha cinco de febrero de 2014, de referencia 309-2007.



únicamente el resultado material a la que está unido causal o normativamente el hecho realizado por el sujeto”.

Es así que, tanto la jurisprudencia como la legislación aplicable a la materia, regulan y sientan las bases para garantizar el irrestricto respeto a los principios fundamentales que dirigen la potestad sancionadora del Estado, siendo el presente caso conocido por una sede administrativa.

III. Para el caso en comento, el denunciante [REDACTED] atribuye a la denunciada [REDACTED] el cometimiento de la infracción grave letra “c” del Art. 76 de la LAIP consistente en: “no proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por un Oficial de Información”. Expuesto lo anterior, corresponde ahora realizar el análisis y valoración de la documentación ofrecida e incorporada como prueba en el presente procedimiento.

A. Como ya se mencionó anteriormente, el denunciante no incorporó elementos probatorios en ninguna etapa del proceso. Por su parte, la documentación ofrecida como prueba por la denunciada [REDACTED] y admitida por el Pleno durante la audiencia oral, es la siguiente: a) “fotocopia de correo electrónico de fecha veinticuatro de enero de dos mil diecinueve”; b) “fotocopia de correo electrónico de fecha treinta de enero de dos mil diecinueve”; c) “fotocopia de solicitud del día veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, por el Licenciado [REDACTED] Director Departamental de Educación de San Salvador”; d) “fotocopia del escrito de remisión de documentación suscrito por su persona en calidad de Directora del Instituto Nacional Acción Cívica Militar del día cuatro de marzo de dos mil diecinueve, dirigido al Licenciado [REDACTED] Director Departamental de Educación de San Salvador”.

En ese orden, con base a los elementos de prueba presentados, valorados conjuntamente, y conforme a la sana crítica, se tienen por establecidos los siguientes hechos: (i) que según copia de correo electrónico de fecha veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, la licenciada [REDACTED] en su calidad de Técnica de Gestión, solicitó al Instituto Nacional Acción Cívica Militar, que remitieran la siguiente información: la distribución de carga académica del año 2019, y distribución de la carga

académica de horas clases por maestros del año 2019, para dar respuesta al requerimiento de información MINED-2019-0050 (folios 16 al 17); (ii) que según copia de la nota de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, suscrita por el licenciado [REDACTED] Director Departamental de Educación de San Salvador, dirigida a la Directora del Instituto Nacional Acción Cívica Militar, [REDACTED], se solicitó que en virtud de la solicitud de acceso a la información pública de referencia MINED-2019-0090, remitiera la información relativa a: “detalle de maestros de horas clases del año lectivo 2019 con sus respectivas materias académicas, y el detalle de maestros de planta oficial del año lectivo 2019 con sus respectivas materias académicas”, y que la misma debería ser remitida en calidad de urgente, sin establecer un plazo específico para cumplir dicho requerimiento (folio 19); (iii) que según folios del 20 al 23, consta una copia de una nota suscrita por la Directora [REDACTED] de fecha cuatro de marzo de dos mil diecinueve, y dirigida al licenciado [REDACTED], por medio de la cual expone que remite respuesta al requerimiento solicitado, el cual obedece al caso MINED-2019-0090, en la cual consta un sello de recibido en la Dirección Departamental de Educación, por [REDACTED] (Sic), el día cuatro de marzo de dos mil diecinueve, a las quince horas con treinta y tres minutos (folio 20); y (iv) según folios 21 al 23, consta copia de la información a la que hace referencia la nota descrita en el romano anterior, fue entregada en su momento en copias certificadas.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

B. Ahora bien, en atención a la denominada “*vertiente material del principio de legalidad o principio de tipicidad*”, corresponde determinar con base a los hechos probados señalados anteriormente, si [REDACTED] Directora del **Instituto Nacional Acción Cívica Militar**, cometió la infracción que se le atribuye.

En primer lugar, se debe analizar la comunicación que debe haber entre un oficial de información, la persona solicitante y la(s) unidad(es) administrativas(s). En los procedimientos de acceso, las personas que son oficiales de información se caracterizan por ser el vínculo entre el ente obligado y quien solicita información (Art. 69 de la LAIP); lo cual conlleva que estos deben tener una oportuna comunicación para que la persona requirente esté al tanto de su solicitud (si así el caso lo exige) y para que la unidad correspondiente realice las gestiones de localización de forma oportuna y clara. Dicha comunicación, en principio, no exige que sea por medio de resolución con todo el formalismo que esta requiere.



Ello no obsta que ante la toma de alguna decisión sí debe mediar una resolución formal que cumpla con la motivación necesaria y que la comunicación que haya dentro del procedimiento y repercuta en la tramitación del mismo, se haga constar por escrito, sea por medio de acta en la que se levante lo dialogado vía telefónica con quien es solicitante de información, escritos propiamente tal o correos electrónicos. De tal afirmación, se deduce que no se convierte en negligencia la comunicación vía electrónica u otro medio; caso contrario es en las actuaciones que impliquen toma de decisión, las cuales deben ser por medio de resolución.

Ahora bien, en el caso del MINEDUCYT, debido a la cantidad de dependencias que administra a nivel nacional, cuenta con una organización distinta a la que tienen otros entes obligados, en lo referente al trámite de las solicitudes de información que reciben. Las competencias contenidas en el Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado para el período 2015-2019³, lo obliga a trabajar con las Direcciones Departamentales de Educación de los catorce departamentos a nivel nacional. Por ello, cada Dirección Departamental cuenta también con una Unidad de Transparencia Departamental, las cuales funcionan como “enlaces departamentales”. Entonces, la oficial de información del MINEDUCYT, para obtener la información generada y en manos de la administración de los Centros Educativos se auxilia de la Unidad de Transparencia de cada Dirección Departamental de Educación, sirviendo estas como enlace entre la Dirección de Transparencia del MINEDUCYT y los Centros Educativos, según su circunscripción territorial por departamento, a fin de obtener la información requerida.

C. Establecido lo anterior, el cometimiento de la infracción grave a la LAIP, consistente en “no proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por un Oficial de Información”, implica la omisión o denegatoria expresa, por parte de la unidad administrativa o dependencia correspondiente de determinado ente obligado, de entregar información que le haya sido requerida por el oficial de información, como producto del trámite que sigue para responder en tiempo las solicitudes de información que recibe.

³ Vigente a la fecha en que el denunciante interpuso su solicitud de información MINED-2019-0090.

Entonces, resulta indispensable analizar las actuaciones ejecutadas en el procedimiento, tanto de lo que consta en el expediente administrativo como en la prueba aportada por la denunciada:

En el presente caso, la denunciada expuso (tanto en el informe de defensa como en la audiencia oral) que ella en ningún momento ha incurrido en la infracción que se le atribuye, pues la información fue entregada oportunamente a la Dirección Departamental de Educación de San Salvador; y que si dicha información no fue entregada al ahora denunciante, se sale de su control y desconoce los motivos.

En relación con lo anterior y a criterio de este Instituto, la denunciada Juárez Pleitez logró acreditar su postura, tal como consta a folios 19 al 23 del presente expediente, en donde se ha logrado verificar que efectivamente remitió la documentación que le fue requerida por el Director Departamental de Educación para contestar el requerimiento MINED-2019-0090; no obstante, dichas diligencias no se encuentran documentadas en el expediente administrativo que lleva la oficial de información (y que actualmente obra en el presente expediente).

D. Por tanto, en el caso bajo análisis, este Instituto ha logrado establecer fehacientemente que la responsabilidad de la infracción no recae en la denunciada [REDACTED] [REDACTED] pues como ya se ha establecido en los párrafos que anteceden, ella sí realizó la entrega de la información que le fue solicitada por la Dirección Departamental de Educación de San Salvador; por lo que, correspondía a esta última dependencia, remitir oportunamente dicha información a la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) del MINEDUCYT, al ser el enlace departamental entre dicho ente (UAIP del MINEDUCYT) y las instituciones educativas del departamento de San Salvador.

De lo anterior, si la información solicitada no fue entregada al señor [REDACTED] [REDACTED], sale de la esfera de responsabilidad de la denunciada; y en consecuencia, es procedente absolver a [REDACTED], Directora del Instituto Nacional Acción Cívica Militar, del presunto cometimiento de la infracción grave contemplada en el Art. 76 letra "c" de la LAIP, consistente en "negarse a entregar la información solicitada, sin



la debida justificación”; por haberse demostrado fehacientemente por parte de la denunciada el no haber incurrido en la infracción señalada.

V. Por último, este Instituto considera necesario pronunciarse sobre el rol fundamental de los y las oficiales de información en la sustanciación de los procedimientos de acceso a la información pública; pues, como ya se detalló, dichos servidores(as) públicos(as) se configuran como el enlace entre los y las solicitantes y la entidad a la que representan.

En tal sentido, el ejercicio de las funciones descritas en el Art. 50 – y demás disposiciones – de la LAIP deben realizarse de forma tal que garanticen el derecho a buena administración que tienen los administrados. La función pública debe significar – restringiendo el análisis al DAIP – un irrestricto respeto a los principios y garantías de las personas que pretenden acceder a información en manos de los entes obligados.

De esto se debe decir, además, que como ya se ha establecido para el caso en particular del MINEDUCYT, esta cartera de Estado cuenta con enlaces departamentales que coadyuvan a la labor que realiza el Oficial de Información de dicho Ministerio, por lo que también deben actuar de manera diligente; es decir, a través de los mecanismos de comunicación adecuados que permitan atender dentro de los plazos de ley los requerimientos que les sean solicitados.

Por ello, se exhorta al MINEDUCYT y a sus enlaces departamentales, a servir a la ciudadanía de manera que los procedimientos que se ejecuten permitan un debido ejercicio del DAIP por parte de los petitionarios; pues no solo corresponde a la oficial de información la garantía de ese derecho, sino también a las unidades administrativas que generan o poseen lo solicitado. Todo ello con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la LAIP y garantizar el derecho de acceso a la información pública de cualquier ciudadano.

Una diligente gestión definitivamente evitará vulneraciones al DAIP de toda persona solicitante; asimismo, evitará que el aparataje Estatal destine recursos (humanos, monetarios, tiempo, etc.) en el inicio de procedimientos sancionatorios ante el posible señalamiento de de infracciones a la LAIP, que muchas veces no han sido cometidas, pero que su inicio deriva

de una comunicación deficiente a nivel interno de determinados entes obligados, como bien ocurrió en el caso que nos ocupa.

3. Decisión del caso

Por tanto, de conformidad con las razones anteriormente expuestas y disposiciones legales citadas, así como en los Arts. 6 y 18 de la Cn., 94, 96 y 102 de la LAIP, este Instituto resuelve:

a) **Absolver a** [REDACTED] **Directora del Instituto Nacional Acción Cívica Militar**, del presunto cometimiento de la infracción grave contemplada en el Art. 76 letra "c" de la LAIP, consistente en: "No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por un Oficial de Información".

b) **Devolver a la oficial de información del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología**, el expediente administrativo relacionado con el presente caso, una vez esta resolución adquiera estado de firmeza. El expediente administrativo deberá ser retirado en las oficinas de este Instituto por dicha servidora pública o persona debidamente autorizada.

c) **Transferir definitivamente este expediente al archivo institucional** una vez quede firme la presente resolución.

d) **Hacer saber a las partes** que contra este acto administrativo cabe el recurso en de reconsideración ante esta sede administrativa de conformidad con el Art. 132 de la LPA; sin embargo, no es requisito para acceder a la jurisdicción Contencioso Administrativa.

e) **Notificar la presente providencia a** [REDACTED], a [REDACTED] [REDACTED] por medio del mecanismo de notificación que han señalado, y al **Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología**, por medio de su Oficial de Información a la dirección electrónica: transparencia@mined.gob.sv, dejándose constancia de haberse realizado.


PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los treinta días del mes de enero de dos mil veinte.



NOTIFICADOR
IAIP

